

La franquicia de la Mano Dura: un análisis longitudinal de las percepciones sobre prácticas autoritarias en la opinión pública y las élites parlamentarias en Centroamérica desde 2020 hasta 2024

The "Mano Dura" Franchise: A Longitudinal Analysis of Perceptions of Authoritarian Practices in Public Opinion and Parliamentary Elites in Central America from 2020 to 2024

Sofía Martínez Osorio
sofiaosorio@usal.es

Sergio Palazón Ruiz
sergio.palazonr@usal.es

María José Carpio-Ulloa
mjcarpio@usal.es

Universidad de Salamanca

Universidad de Salamanca

Universidad de Salamanca

ORCID: 0009-0002-4842-378

ORCID: 0009-0008-3747-4361

ORCID: [0009-0006-6177-3201](https://orcid.org/0009-0006-6177-3201)

*Datos sobre los autores en la siguiente pagina

NO COMPARTIR, ARTÍCULO PENDIENTE DE PUBLICAR

Resumen

Centroamérica atraviesa un retroceso democrático impulsado por líderes de "mano dura" y la aceptación ciudadana de soluciones iliberales a cambio de seguridad. Este artículo analiza la relación entre las percepciones de la sociedad civil y las élites parlamentarias sobre la justificación de comportamientos autoritarios en Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Panamá (2020-2024). Usando datos de Latinobarómetro y PELA-USAL, se examinan dos dimensiones mediante análisis descriptivo, correlacional y modelos multinivel. Los resultados muestran ausencia de correlación significativa entre ambos grupos en preferencia democrática, aunque la sociedad justifica más la concentración de poder que las élites. El estudio evidencia que la convergencia autoritaria no es lineal, sino diferenciada por dimensiones y países.

Palabras clave: *Autoritarismo, Sociedad, Élites Parlamentarias, PELA-USAL, Inseguridad Ciudadana, Desconfianza Institucional.*

Abstract

Central America faces democratic backsliding driven by "iron fist" leaders and citizen acceptance of illiberal solutions for security. This article analyzes the relationship between civil society and parliamentary elites' perceptions of authoritarian behavior justification in Costa Rica, El Salvador, Guatemala, and Panama (2020-2024). Using Latinobarómetro and PELA-USAL data, two dimensions are examined through descriptive, correlational, and multilevel analyses. Results show no significant correlation between groups in democratic preference, though society justifies power concentration more than elites. The study reveals that authoritarian convergence is not linear but varies across dimensions and countries.

Keywords: Authoritarianism, Society, Parliamentary Elites, PELA-USAL, Citizen Insecurity, Institutional Distrust.

**Sofía Martínez Osorio* es doctoranda y máster en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Salamanca e investigadora del Instituto de Iberoamérica dentro del proyecto Observatorio de Élités Parlamentarias en América Latina (PELA-USAL). Su trabajo analiza el populismo, el autoritarismo y el retroceso democrático en la región, con especial énfasis en el caso de El Salvador. Ha colaborado además en proyectos de investigación internacional como DAPL-Duke University.

Sergio Palazón Ruiz, doctorando del Programa de Ciencias Sociales de la Universidad de Salamanca, línea de investigación de Estudios Latinoamericanos. Investigador del Instituto de Iberoamérica y colaborador del Proyecto PELA - USAL. Con interés en las instituciones políticas y los efectos sobre los representantes electos, así como la inclusión de género en las instituciones democráticas.

María José Carpio Ulloa es Doctora en Ciencias Políticas (USAL) y Licenciada en Geografía (UCR), especializada en geopolítica, ultraderecha y dinámicas político-religiosas. Su producción bibliográfica investiga la expansión de la ultraderecha y el neopentecostalismo en América Latina. Ha trabajado como consultora de investigación para organizaciones como la ONU, FLACSO y el University College London (UCL). Colabora de forma activa con el grupo de investigación sobre religiones y política de CLACSO.

Introducción

Centroamérica, una de las regiones más desiguales y convulsas del planeta, constituye una unidad geopolítica que comparte una trayectoria histórica común desde la era colonial, aunque se caracteriza por una profunda diversidad en sus procesos de consolidación estatal. La región no transitó de un régimen autoritario hacia democracias consolidadas, ni viceversa, sino hacia un esquema de democracias híbridas de baja intensidad (Torres-Rivas, 2007). La incapacidad estructural para saldar la brecha distributiva, la captura del Estado por élites neocorporativas y la reconfiguración del autoritarismo, fundamentan el actual ciclo de desafección democrática en el istmo.

La periodización del desarrollo institucional revela un proceso de erosión democrática gradual. Una primera fase de transición y dividendos de la paz (1994-2009) edificó la arquitectura electoral posbélica y formalizó acuerdo de integración regional, aunque el modelo económico neoliberal primó sobre la equidad distributiva. Una segunda fase de inflexión regresiva (2010-2019) supuso el quiebre del orden constitucional en Honduras y la cooptación de altas cortes en el Triángulo Norte, acelerada tras la expulsión de misiones internacionales contra la impunidad (CICIG en Guatemala, MACCIH en Honduras). Finalmente, la tercera fase (2020-2026) evidencia un declive democrático acelerado, donde la adhesión a la democracia liberal cayó por debajo del 10 % en la mitad de los países del istmo, cediendo terreno a la ambivalencia ciudadana y la aceptación del iliberalismo a cambio de orden.

Al cierre de este periodo, el mapa político centroamericano exhibe una tipología fragmentada. El Salvador representa un autoritarismo punitivo y neocentralista bajo el mandato de Nayib Bukele, fundamentado en la suspensión sistemática de garantías constitucionales mediante el estado de excepción y la sustitución del contrapeso de poderes por el control directo del Ejecutivo sobre las instancias judiciales. Guatemala y Honduras operan como democracias híbridas cruzadas por la fragilidad institucional y la cooptación de los aparatos de justicia por redes corporativo-mafiosas. Costa Rica y Panamá preservan la institucionalidad democrática, aunque enfrentan un deterioro gradual de la cohesión social y tensiones estructurales en el financiamiento del Estado social de derecho.

Ante este panorama, la drástica caída de la violencia homicida en El Salvador ha erigido al "Modelo Bukele" como un paradigma regional para los gobiernos que enfrentan crisis de seguridad, presionando a las élites latinoamericanas a emular sus estrategias. (Marti i Puig y Rodríguez Suárez, 2024): Este fenómeno responde a un proceso de securitización, donde la construcción de amenazas no refleja circunstancias objetivas, sino que resulta de un proceso intersubjetivo en el que un actor político convence a una audiencia de adoptar medidas excepcionales que de otro modo serían ilegítimas. Bajo la premisa de “seguridad a cambio de democracia”, el populismo punitivo se ha consolidado como el marco cognitivo predominante para abordar la inseguridad.

El recorrido analítico de las últimas tres décadas demuestra que la adopción de mecanismos electorales no garantiza la consolidación de un orden democrático sustantivo si se mantienen intactas las bases sociológicas del autoritarismo estructural. Centroamérica continúa inmersa en una “transición sin desenlace previsible” (Torres-Rivas, 1991), donde la aceptación ciudadana de soluciones iliberales y la convergencia de las élites legislativas con estos discursos resultan determinantes para el rumbo de la región. Sin embargo, la relación entre las percepciones de la sociedad civil y las élites parlamentarias en materia de justificación de comportamientos autoritarios no ha sido suficientemente explorada de forma comparada en el istmo.

Este artículo analiza la evolución de las percepciones sobre la justificación de comportamientos autoritarios en la sociedad y las élites parlamentarias de Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Panamá entre 2020 y 2024. Utilizando datos de Latinobarómetro y del Proyecto PELA-USAL, se examina si existe una correlación entre ambos grupos en dos dimensiones clave, la preferencia democrática y la concentración de poderes, y, si dicha relación se ha fortalecido en el tiempo, particularmente en el contexto del aumento de la inseguridad y la irrupción del “modelo de mano dura”. Los hallazgos contribuyen a comprender los mecanismos de legitimación social del autoritarismo en la región y ofrecen evidencia empírica sobre las dinámicas de convergencia o divergencia entre élites y ciudadanía en contextos de crisis democrática, aportando elementos para discutir la viabilidad de la democracia liberal en el istmo.

El Contrato Autoritario: Populismo Punitivo, "Modelo Bukele" y la Erosión Democrática en América Latina

En América Latina, la réplica de políticas de seguridad restrictivas responde a un proceso de aprendizaje institucional donde las estrategias autoritarias se legitiman mutuamente. Este mimetismo forma parte de la teoría de la securitización de Balzacq, Léonard y Ruzicka (2016), la cual sostiene que la construcción de amenazas de seguridad no refleja necesariamente circunstancias materiales objetivas, sino que es el resultado de un proceso intersubjetivo en el que un actor político utiliza artefactos heurísticos para convencer a una audiencia de adoptar medidas excepcionales que de otro modo serían ilegítimas. Las prácticas de securitización se sedimentan en un campo de profesionales de la inseguridad que tiende a unificar bajo el mismo banner problemas como la migración, la delincuencia y el terrorismo, desplazando explicaciones alternativas basadas en la desigualdad o la injusticia social.

En este escenario, la drástica disminución de homicidios en El Salvador ha convertido al "Modelo Bukele" en un referente regional para líderes que enfrentan picos de violencia; un esquema punitivo potenciado por una cuidada estrategia en redes sociales que no solo le asegura un alto respaldo interno, sino que ha captado la admiración de mandatarios de línea dura y élites empresariales en el extranjero (Gamboa y Schwartz, 2026). El Salvador ha proyectado regionalmente el denominado "método Bukele" como un modelo de "eficientismo" punitivo altamente exportable. Este modelo ejerce una fuerte presión de emulación sobre las élites políticas latinoamericanas, las cuales se ven tentadas a imitar estas prácticas para granjearse la aprobación de sus respectivas sociedades civiles (Martí i Puig y Rodríguez Suárez, 2024).

De manera particular, Centroamérica experimenta una clara difusión de ideologías autoritarias impulsada por la atracción hacia estos modelos de control territorial. Un ejemplo de esto se reflejó en la militarización y el estado de excepción decretados por la presidenta Xiomara Castro en Honduras a finales de 2022, así como en el debate político panameño, donde sectores de oposición califican abiertamente al mandatario salvadoreño como un referente indiscutible en seguridad pública (Brown Araúz y Casullo, 2023).

Las élites políticas de países como Guatemala, Honduras y Perú observan, aprenden y adaptan de manera recíproca diversas estrategias de cooptación institucional y

debilitamiento del Estado de derecho. Este mimetismo procedimental demuestra que el retroceso democrático (*backsliding*) no solo se propaga mediante la emulación de discursos de mano dura, sino también a través del aprendizaje transnacional de técnicas de captura de los aparatos de justicia y reforma electoral (Gamboa y Schwartz, 2026).

El populismo punitivo o populismo penal se ha consolidado en la última década como el marco cognitivo y discursivo predominante para abordar la inseguridad en el Triángulo Norte de Centroamérica, expandiendo rápidamente su influencia hacia el resto del continente. La articulación discursiva de este paradigma requiere de la construcción de una narrativa mítica y moralizadora. El relato populista punitivo dicotomiza de manera radical a la sociedad entre "el pueblo virtuoso" y un enemigo o "villano" que inflige un daño moral al colectivo (Brown Araúz y Casullo, 2023). Originalmente definido por Anthony Bottoms (1995), este concepto describe la utilización demagógica del derecho penal por parte de los gobernantes con el fin de obtener réditos electorales, bajo la premisa acrítica de que el aumento de las penas disminuirá el delito y salvaguardará el orden moral de la sociedad.

Es así como el populismo punitivista se manifiesta en diversas tipologías que intersectan la ideología política de las élites con los sistemas de medios de comunicación. Por un lado, el populismo punitivo autoritario, típico de la derecha política, construye una división binaria y moral de "suma cero" entre ciudadanos honestos y criminales deshumanizados, justificando el uso de niveles extremos de violencia estatal para neutralizar al "enemigo común". Por otro lado, el populismo punitivo de conflicto, frecuente en la izquierda, intenta balancear discursivamente el control penal estricto con promesas de reforma socioeconómica, aunque en la práctica gubernamental termina recurriendo a políticas igualmente represivas y militarizadas para satisfacer las demandas sociales (Bonner, 2021).

En la misma línea, el discurso punitivista opera mediante tres factores ideológicos consustanciales: la transformación del papel de la cárcel de una institución rehabilitadora a una de exclusión y castigo represor; la magnificación y centralidad del discurso de las víctimas y su exigencia de retribución penal en el debate político; y la politización y el uso electoral de la inseguridad por parte de los partidos para desgastar al rival (Antón-Mellón, Álvarez y Rothstein, 2017).

En el Triángulo Norte, este modelo ha permitido que las élites legislativas y gubernamentales utilicen la demanda social de castigo para justificar la deconstrucción de

los límites liberales del Estado de derecho (Brown Araúz y Casullo, 2023). En contextos de alta violencia, los legisladores de partidos oficiales y opositores convergen en la aprobación de reformas penales draconianas debido a que el castigo severo se convierte en la única moneda de cambio políticamente viable para asegurar la legitimidad popular Gamboa y Schwartz (2026).

El mismo se estructura sobre la base de un intercambio explícito de "seguridad a cambio de democracia". Es así como el gobierno salvadoreño ha instrumentalizado el estado de excepción, prorrogado de manera permanente por la Asamblea Legislativa, como la condición ordinaria de la política del país, lo que ha facilitado la detención de más de 76 mil personas sin garantías procesales mínimas, bajo el aplauso mayoritario de una sociedad civil que prioriza la neutralización de las pandillas por encima de las libertades individuales (Martí i Puig y Rodríguez Suárez, 2024).

Bajo esa premisa de intercambiar seguridad por democracia, surge un estado de la democracia representativa en el cual los componentes formales del sistema (elecciones, tribunales, partidos) mantienen su vigencia y operatividad legal, pero sus funciones sustantivas de representación, intermediación y legitimidad social se encuentran profundamente desgastadas. Este desgaste es impulsado por la precarización económica y el triunfo cultural del individualismo, y se ve acelerado por tecnologías de comunicación digital que sustituyen el debate programático y colectivo por la personalización de la política, las burbujas de resonancia emocional y los liderazgos personalistas de fuerte base mediática (Alcántara, 2019).

A nivel regional, la irrupción de escenarios de miedo social, sumada al auge del capitalismo de vigilancia digital, ha propiciado que los ciudadanos acepten de manera voluntaria formas de vigilancia y control estatal excepcionales para evitar males mayores (Alcántara, 2020). Un claro ejemplo de esto es la encuesta del IUDOP (2026) realizada recientemente en El Salvador la cual revela que el 77.4% de la población considera que la seguridad y el encarcelamiento de las pandillas son lo mejor que está sucediendo en el país y un 47% señala el combate al crimen como el logro principal del gobierno. Pero una de las frases que respalda el apoyo a este tipo de medidas autoritarias es que el 45.9% de los encuestados define al presidente Bukele bajo la frase: "Es un presidente que pone orden con mano dura" (IUDOP, 2026).

Esta fatiga y desafección se inserta en la rigidez del diseño presidencialista de la región. Como advirtió Linz (1990), el presidencialismo introduce un juego político de "suma cero" en el que el ganador se lo lleva todo para un período rígido de tiempo, lo que exacerba las tensiones de legitimidad dual entre el presidente y el Congreso, obstaculizando la formación de consensos tácitos y empujando a los actores políticos a buscar salidas autoritarias o a respaldar intervenciones fácticas cuando se producen parálisis gubernamentales.

Desde una perspectiva filosófica, estas acciones nos llevan hacia una violencia cultural, la cual consiste en aquellos aspectos simbólicos de la cultura, materializados en la ideología, la religión o el lenguaje de las élites, que se utilizan para justificar, legitimar y hacer aceptable la violencia directa o estructural ante los ojos de la sociedad. El discurso punitivo y la retórica gubernamental de "guerra" contra la delincuencia actúan como violencia cultural al cambiar el "color moral" de las acciones estatales: el encarcelamiento masivo de inocentes o el uso de la fuerza desproporcionada dejan de percibirse como violaciones a los derechos humanos y pasan a considerarse "males necesarios" u "obras de justicia" en beneficio del bien común (Galtung, 1990, 2016).

La disposición de la ciudadanía y de los legisladores a sacrificar garantías constitucionales, derechos humanos y pesos y contrapesos puede explicar mediante el concepto de "eficacia instrumental". Este dilema teórico postula que, en sociedades asoladas por la violencia crónica, el éxito percibido de medidas autoritarias en la reducción del delito incrementa exponencialmente el respaldo popular a prácticas iliberales, relegando los principios de la democracia liberal a un plano secundario (Martí i Puig y Rodríguez Suárez, 2024).

A nivel de las élites, las actitudes populistas y antipluralistas de los parlamentarios están significativamente vinculadas con un menor nivel de apoyo y satisfacción con la democracia liberal, sus instituciones intermediadoras (partidos y congresos) y la separación de poderes, esta hostilidad iliberal de las élites se ve moderada cuando el legislador pertenece al partido de gobierno, lo que sugiere que los parlamentarios justifican el desmantelamiento de los controles constitucionales cuando estiman que esto facilita la ejecución "eficaz" y directa de sus políticas desde el poder (Marenghi y García Montero, 2025).

Es así como la convergencia autoritaria entre la opinión pública y las élites parlamentarias tiene consecuencias de largo plazo sobre el diseño del régimen político, promoviendo la transición desde democracias liberales hacia esquemas de erosión democrática desde dentro (*backsliding*) y autoritarismo competitivo (Gamboa y Schwartz, 2026).. De acuerdo con el reporte global de V-Dem Institute (2026), la democracia en el mundo ha retrocedido a los niveles de 1978, erradicando casi por completo los avances de la denominada "tercera ola". Este retroceso se evidencia con fuerza en el hemisferio occidental, donde países tradicionalmente estables como Estados Unidos han perdido su estatus de democracia liberal y han descendido a la categoría de democracia electoral debido al desmantelamiento progresivo de los contrapesos judiciales y legislativos sobre el ejecutivo (V-Dem Institute, 2026).

Estas dinámicas de regresión como pueden definirse como "nuevas formas de erosión democrática" las cuales se gestan desde el interior del Estado mediante el uso de mecanismos institucionales y legales a través de diversas modalidades de autocratización: el "engrandecimiento ejecutivo" personalista (como en El Salvador bajo Bukele), el "engrandecimiento partidista" (como en México bajo el dominio del partido Morena), el "autoritarismo legislativo" (como en Perú) y la "colusión de élites" mediante el aparato judicial (como en Guatemala) (Gamboa y Schwartz, 2026). En todas estas variantes, el impacto común es el quebranto de la rendición de cuentas horizontal y la neutralización de los contrapesos constitucionales.

En el caso salvadoreño, este proceso de des-democratización se consumó mediante la destitución expedita de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y del Fiscal General de la República en 2021 por parte de la Asamblea Legislativa dominada por el oficialismo. Esta cooptación de las instituciones de control horizontal facilitó la habilitación de la reelección presidencial inmediata y dio paso a una profunda reforma del sistema electoral (reducción de diputaciones de 84 a 60, aplicación de la fórmula D'Hondt y drástica reducción de municipios) diseñada para neutralizar la representación de la oposición y asfixiar su capacidad de competencia vertical en las elecciones de 2024, consolidando un régimen de autoritarismo competitivo (Martí i Puig y Rodríguez Suárez, 2024).

Por otra parte, las élites legislativas facilitan o resisten esta erosión, al cumplir sus funciones como actores de veto. Un actor de veto es aquel individuo o colectivo cuyo

acuerdo es constitucional o políticamente requerido para alterar el statu quo. La erosión democrática en sistemas presidencialistas opera precisamente mediante la reducción sistemática de estos actores de veto. Al cooptar el parlamento y neutralizar la independencia judicial, el presidente elimina a los actores de veto institucionales incongruentes, lo que reduce el tamaño del *winset* del statu quo y le permite modificar de manera unilateral, rápida y con barniz de legalidad las reglas del juego democrático para concentrar el poder (Tsebelis, 1995).

Finalmente, esta claudicación de los contrapesos legislativos se formaliza en una "legislatura subordinada". Este término hace referencia a cuando el ejecutivo cuenta con un elevadísimo porcentaje de legisladores leales y disciplinados que dependen de él para su carrera política futura, la asamblea abandona su rol reactivo de enmienda y veto para someterse con docilidad a las iniciativas presidenciales, permitiendo la instauración de un "presidente dominante" que gobierna sin contrapartes constitucionales eficaces (Cox y Morgenstern, 2001).

Marco Metodológico:

1. Diseño de investigación

El presente estudio adopta un diseño de investigación comparado de tipo longitudinal¹ y transnacional, orientado al análisis de la evolución de las percepciones sobre la justificación de comportamientos autoritarios en dos niveles de análisis: la ciudadanía (nivel micro) y las élites parlamentarias (nivel meso). La elección de un diseño comparado responde a la necesidad de identificar patrones comunes en países con trayectorias democráticas diversas. En este marco, se formula la pregunta de investigación: ¿Existe una relación entre las percepciones de la sociedad civil y las élites parlamentarias en Centroamérica respecto a la justificación de comportamientos autoritarios, y, dicha relación varía según el país y el contexto propio? Para responderla, el trabajo se traza como objetivo principal analizar las percepciones sobre la justificación de comportamientos autoritarios en la sociedad y las élites parlamentarias de cuatro países centroamericanos, identificando diferencias entre ambos grupos, tendencias temporales y patrones de convergencia. Finalmente, a partir de este planteamiento se desprende la H1: Existe una correlación positiva significativa entre la

¹ Siendo transversal en dos de las dimensiones analizadas.

opinión de la sociedad y los legisladores en la justificación de comportamientos autoritarios en Centroamérica.

Por su parte, la unidad de análisis está constituida, por un lado, por los ciudadanos entrevistados en las encuestas de Latinobarómetro y, por otro lado, por los parlamentarios entrevistados en el marco del Proyecto PELA-USAL. El nivel de agregación para el análisis comparado será el país-año, permitiendo emparejar ambas bases de datos en tiempo y espacio para su análisis detallado.

2. Fuente de datos

Los datos empleados proceden de dos fuentes principales:

- Latinobarómetro²: han sido utilizados los datos de las olas correspondientes al período 2020, 2023 y 2024, abarcando los países de Guatemala, El Salvador, Costa Rica y Panamá.
- Proyecto PELA-USAL³: han sido utilizados los datos de las legislaturas disponibles entre el año 2020 y el 2024⁴, de los países a estudiar (Guatemala, Costa Rica, El Salvador y Panamá).

3. Operacionalización de las variables

La variable dependiente es la justificación de comportamientos autoritarios, definida como la predisposición a aceptar medidas que restringen libertades civiles, concentran poder en el Ejecutivo o eluden controles institucionales.

Dado que las preguntas no son idénticas entre bases, se opta por trabajar con dimensiones analíticas separadas en lugar de un índice compuesto, lo que permite un análisis más certero a la par que evita la pérdida de información:

² Latinobarómetro es una encuesta anual aplicada a muestras representativas de la población adulta de cada país, con un tamaño muestral de 1000 casos por país. Esta fuente es de especial relevancia para el estudio, ya que incluye cuestiones acerca de tendencias autoritarias y satisfacción con la democracia.

³ El Proyecto PELA (Proyecto de Élite Parlamentarias) de la Universidad de Salamanca, es un proyecto de investigación que realiza entrevistas anónimas a los legisladores de las Cámaras Bajas de América Latina cada vez que se produce una renovación en dichas cámaras legislativas. La muestra de dichas olas de cuestionarios está compuesta por todos los partidos que componen la legislatura, usando criterios para la inclusión de estos de carácter representativo.

⁴ Los periodos de las oleadas de PELA-USAL corresponden a las legislaturas: Costa Rica 2018-2022 y 2022-2026; Guatemala 2016-2020 y 2024-2028; Panamá 2019-2023 y 2024-2020; y, El Salvador 2018-2021.

- Dimensión 1: Preferencia por democracia vs autoritarismo. Captura la valoración general de la democracia frente a regímenes alternativos. Se mide mediante P10STGBS en Latinobarómetro y DEM3N en PELA-USAL, recodificadas en escala 0-1 (0 = máxima preferencia democrática; 1 = máxima justificación autoritaria).
 - Dimensión 2: Justificación de autoritarismo en contextos de crisis. Mide la aceptación de soluciones autoritarias en situaciones adversas. En Latinobarómetro se usan P20STM y P18STM.B; en PELA-USAL los ítems 1 y 3 de la batería ACT1. Todas ellas se inscriben en el marco conceptual de democracias delegativas, permitiendo su comparación a nivel constructo.
 - Dimensión 3: Mano dura y concentración de poder. Diseñada para medir en élites la priorización de la seguridad sobre derechos civiles y la aceptación de que el Ejecutivo actúe al margen de contrapesos. Se mediría mediante los ítems 2,4,5 y 8 de ACT1 en PELA-USAL. Sin embargo, esta dimensión tan solo pudo ser incluida a un análisis complementario meramente descriptivo, debido a la ausencia de este indicador en las oleadas de encuestas anteriores al 2024.
- Se incorpora como variable de control la variable satisfacción con la democracia, P11STGBS.A en Latinobarómetro y DEM5 en PELA-USAL.

Tabla 1 Cuadro Resumen de Variables

Dimensión/Variable	Definición	Latinobarómetro	PELA-USAL	Recodificación⁵ 1-0
D1: Preferencia democracia vs autoritarismo	Valoración de la democracia frente a regímenes autoritarios	P10STGBS	DEM3 (invertida)	0 = prefiere democracia; 1 = justifica autoritarismo

⁵ Véase Anexos para Recodificación completa de las preguntas

D2: Justificación de autoritarismo en crisis	Aceptación de soluciones no democráticas en contextos adversos	P20STM/P18STM. B	ACT 1 (ítems 1 y 3)	0 = no justifica; 1 = justifica plenamente
D3: Mano dura y concentración de poder	Apoyo a medidas represivas y elusión de contrapesos	-	ACT 1 (Ítems 2, 4, 5 y 8)	0 = no justifica; 1 = justifica plenamente
Control: Satisfacción con democracia	Evaluación subjetiva del funcionamiento democrático	P11STGBS.A	DEM 5	0 = nada satisfecho; 1 = muy satisfecho

Elaboración propia en base a Latinobarometro y PELA-USAL

4. Estrategia de análisis

La estrategia de análisis se articula en tres fases diferenciadas y orientadas a dar respuesta a la pregunta de investigación planteada:

- Fase 1: Análisis descriptivo. Se calculan medias anuales de justificación autoritaria para sociedad y élite por país y dimensión, representado gráficamente mediante series temporales, identificando tendencias y posibles puntos de inflexión.
- Fase 2: Análisis de correlación bivariada: Para contrastar la H1, se calculan coeficientes de correlación de Pearson entre las medias de sociedad y élite para cada país-año en D1 y D2.

- Fase 3: Análisis multivariante: Se estima un modelo de regresión multinivel con efectos aleatorios por país y año, que permite controlar por factores de confusión. La variable dependiente es la justificación autoritaria (D1 y D2). Las variables independientes de interés son : tipo de actor (sociedad vs élite) y su interacción con el tiempo. Se incluye como variable de control a nivel individual la satisfacción con la democracia.

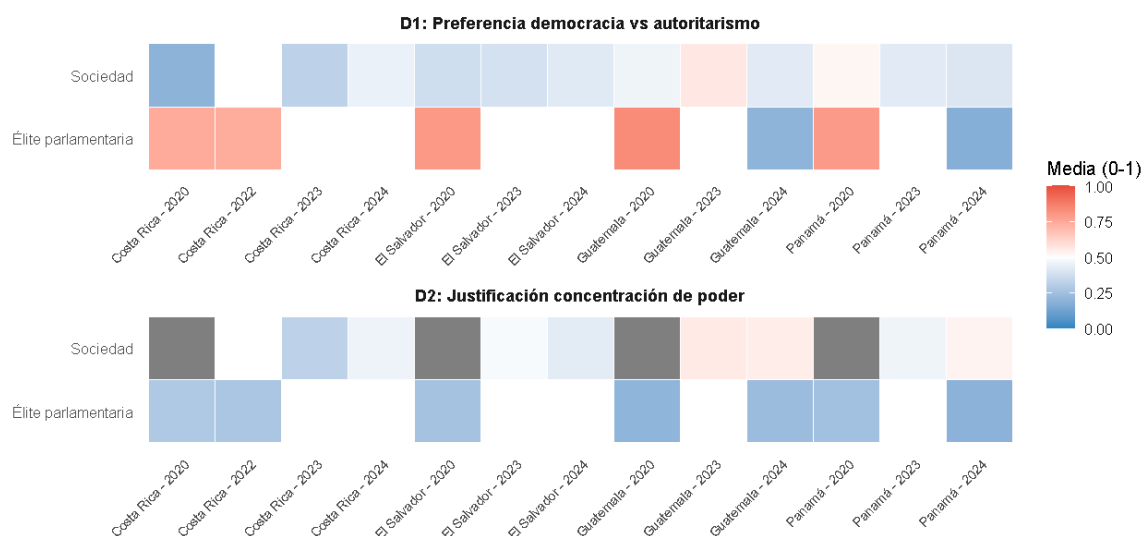
Adicionalmente, se incluye un análisis descriptivo de la dimensión D3 (mano dura) para las élites de Guatemala y Panamá en 2024, único año y países con datos disponibles, con el objetivo de ofrecer una imagen actual de estas actitudes como complemento al análisis longitudinal.

Resultados

1. Fase descriptiva

En primer lugar, son analizadas las dos dimensiones principales, referencias a la preferencia entre democracia o autoritarismo y la justificación de la concentración de poder. Para ello, es expuesto en la ilustración N°1 un mapa de calor, el cual muestra la intensidad de la justificación autoritaria (en escala 0-1) para cada país, año y grupo (Sociedad vs Élite). Los tonos azules indican baja justificación (cercana a 0), mientras que los tonos rojos indican alta justificación (cercana a 1).

Ilustración 1 Mapa de Calor Dimensiones 1 y 2



Elaboración propia en base a PELA-USAL y Latinobarómetro

Siguiendo la ilustración se observan cuestiones de interés. Por un lado, en lo que respecta a la primera dimensión estudiada, las élites muestran valores más altos en 2020, mientras que la sociedad presenta valores más moderados en prácticamente todos los años analizados, exceptuando la oleada de Guatemala en 2023 y Panamá en 2020, no obstante, la preferencia por el autoritarismo no es muy elevada. En contraposición, en 2024, las élites de Guatemala y Panamá muestran valores muy bajos en este indicador, indicando un cambio de percepción sustancial.

Por otro lado, la segunda dimensión analizada, referente a la justificación de la concentración del poder, da indicios de una mayor justificación por parte de la sociedad a la concentración de poder. En contraste, los parlamentarios justifican en menor medida esto, lo que puede devenir sesgado debido a ser ellos integrantes del poder Legislativo.

Además, se ha de señalar que no se observa un patrón regional homogéneo, es decir, cada país muestra unas dinámicas concretas diferentes, salvando las justificaciones autoritarias por parte de la élite política del año 2020. Si bien, es cierto que en esta misma cuestión la sociedad regional parece tener un pensamiento más cercano entre países, mostrando una preeminente preferencia por la democracia frente a un gobierno autoritario, a su vez, se

encuentra una mayor disparidad de opiniones en lo que respecta a la concentración de poderes.

2. Análisis de correlación bivariada y modelo multinivel

Para contrastar la hipótesis H1, se calculó el coeficiente de correlación de Pearson entre las medias anuales de justificación autoritaria de la sociedad y la élite parlamentaria para cada país-año. En la dimensión D1 (preferencia por democracia vs autoritarismo), la correlación no resultó significativa ($r = -0.041$, $p = 0.938$; $n = 6$), lo que indica que no existe una relación lineal entre las percepciones de ambos grupos. En la dimensión D2 (justificación de concentración de poder), la disponibilidad de datos fue insuficiente: únicamente los años 2024 en Guatemala y Panamá contaban con información comparable en ambas fuentes ($n = 2$), lo que impide el cálculo de coeficiente robusto. Por tanto, la hipótesis H1 no encuentra respaldo empírico en los datos disponibles, todo esto es reportado en la Tabla 2.

Tabla 2 Valores Correlación de Pearson

Dimensión	R de Pearson	p-valor	N
D1: Preferencia democracia vs autoritarismo	-0. 041	0. 938	6
D2: Justificación concentración de poder	-	-	2 ⁶

Elaboración propia en base a PELA-USAL y Latinobarómetro

Los modelos multinivel realizados mostraron que, controlando por país, la justificación de comportamientos autoritarios ha disminuido significativamente en la dimensión D1 a lo largo del tiempo ($\beta = -0.145$, $t = -42.87$). Esta tendencia es similar para la sociedad y la élite, ya que la interacción entre tipo de actor y tiempo no es significativa. En la dimensión D2, no se observan cambios temporales significativos ($\beta = -0.003$, $t = -0.847$), no encontrando diferencias significativas entre sociedad y élite, lo que refuerza la ausencia de correlación reportada en la fase anterior.

⁶ Insuficiente para calcular correlación

3. Fotografía actual

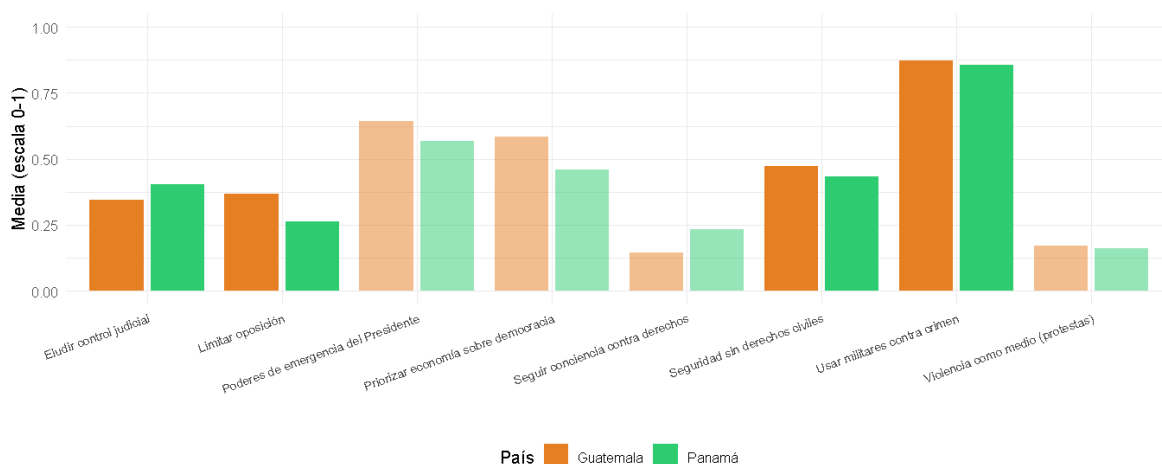
Como complemento al análisis longitudinal, se presenta una “fotografía” de la dimensión D3 (mano dura) en las élites parlamentarias para el año 2024, el único en el que esta información está disponible en PELA-USAL para los países de estudio. Si bien, la ausencia de datos equivalentes en Latinobarómetro impide la comparación con la sociedad, este ejercicio descriptivo ofrece una aproximación al estado actual de las actitudes de las élites en Guatemala y Panamá.

Como se observa en la ilustración N° 2 en líneas generales, las élites parlamentarias de Guatemala y Panamá en 2024 presentan un patrón de actitudes autoritarias heterogéneo, con diferencias relevantes entre ambos países.

Los ítems vinculados a la dimensión 3, referente a la mano dura (seguridad sin derechos civiles, limitación de la oposición, elusión del control judicial y uso de militares contra el crimen) son los que registran un mayor respaldo en ambos países, especialmente el uso de militares y la priorización de la seguridad sobre garantías civiles, lo que refleja una marcada inclinación hacia soluciones securitarias y de control social.

Sin embargo, los ítems que miden la erosión de las instituciones democráticas (priorizar la economía sobre la democracia o conceder poderes de emergencia al Presidente) obtienen un respaldo sensiblemente menor, lo que sugiere que las élites distinguen entre la concentración excepcional de poder y la restricción permanente de libertades.

Ilustración 2 Apoyo a Populismo Punitivo (Élite Parlamentaria)



Elaboración propia en base a PELA-USAL

Guatemala muestra un respaldo más alto que Panamá en casi todos los ítems, especialmente en la justificación de medidas represivas, lo que podría reflejar un contexto de mayor inseguridad o una cultura política más tolerante con el autoritarismo. Panamá, por su parte, mantiene valores más moderados, aunque no ausentes, lo que apunta a un perfil menos punitivo pero igualmente alejado de los estándares democráticos ideales.

En conjunto, los resultados sugieren que, si bien las élites de ambos países no avalan plenamente un quiebre institucional, sí muestran una disposición preocupante a normalizar el uso de mecanismos autoritarios como respuesta a problemas de gobernabilidad, especialmente en Guatemala.

Conclusión y Discusión

Esta investigación ha mostrado que la relación entre las percepciones de la sociedad civil y las élites parlamentarias en materia de justificación de comportamientos autoritarios es más compleja de lo que la literatura sugiere. Aunque la sociedad parece más dispuesta a intercambiar libertades por seguridad, y las élites muestran un patrón de mano dura creciente, no existe una correlación lineal entre ambos grupos.

No obstante, las limitaciones del estudio ya enunciadas a lo largo del trabajo, provoca que estos resultados se deban de tomar con cautela, futuras investigaciones deberían ampliar la cobertura temporal y geográfica, así como explorar cualitativamente los mecanismos subyacentes a la divergencia entre sociedad y élite.

Por último, se ha de concluir con una reflexión general sobre lo estudiado. La caída del apoyo a soluciones autoritarias por encima de las democráticas, así como las diferencias en la opinión respecto a la concentración de poderes en pocas manos, son hallazgos que invitan a cuestionar la relación entre opinión pública, élites y erosión democrática, lo que es de interés especialmente en un contexto de retroceso democrático regional.

Comprender estas dinámicas es crucial para diseñar estrategias de defensa institucional que tenga en cuenta no sólo las demandas de seguridad, sino también los costos de su satisfacción a través de medidas autoritarias. La distinción entre el apoyo al populismo punitivo y autoritarismo emerge como una línea de análisis relevante para futuras investigaciones relacionadas con lo evidenciado en este trabajo.

Por otro lado, con base a los resultados expuestos, se resaltan los principales hallazgos extraídos y comparando estos con la literatura analizada.

1. La ausencia de correlación entre sociedad y élite

Uno de los hallazgos más relevantes de esta investigación es la ausencia de correlación significativa entre las percepciones de la sociedad civil y las élites parlamentarias en la primera dimensión analizada (preferencia por democracia vs. autoritarismo). Este resultado contradice la literatura que sugiere una creciente convergencia autoritaria entre opinión pública y élites en contextos de erosión democrática (V-Dem Institute, 2026; Gamboa y Schwartz, 2026).

Desde la teoría de la securitización (Balzacq, Léonard y Ruzicka, 2016), cabría esperar que la construcción de amenazas y la difusión del "Modelo Bukele" como referente regional hubieran generado un alineamiento entre las percepciones de sociedad y élite. Sin embargo, nuestros datos sugieren que este proceso no es automático ni homogéneo. Una posible explicación es que las élites parlamentarias, al tener un conocimiento más profundo de los costos institucionales de las medidas autoritarias, desarrollan una postura más cautelosa frente a la erosión de las garantías democráticas. Por el contrario, la sociedad civil, más expuesta a los discursos mediáticos y a la fatiga por la inseguridad, podría mostrar una mayor disposición a aceptar soluciones iliberales, lo que explicaría la divergencia observada.

2. El "intercambio seguridad por democracia"

Los resultados de la segunda dimensión confirman la vigencia del paradigma del "intercambio seguridad por democracia" (Martí i Puig y Rodríguez Suárez, 2024). La ciudadanía, particularmente en contextos de alta violencia, parece dispuesta a aceptar la concentración de poder en el Ejecutivo a cambio de una reducción efectiva de la inseguridad. Este hallazgo es consistente con la noción de eficacia instrumental, que postula que el éxito percibido de medidas autoritarias en la reducción del delito incrementa exponencialmente el respaldo popular a prácticas iliberales, relegando los principios de la democracia a un plano secundario.

La diferencia observada entre sociedad y élite en la segunda dimensión analizada puede interpretarse a la luz del concepto de populismo punitivo (Brown Araúz y Casullo, 2023; Bonner, 2021). La sociedad, como audiencia de los discursos securitarios, internaliza la narrativa dicotómica que divide a la sociedad entre "el pueblo virtuoso" y un "enemigo" que debe ser neutralizado (Bottoms, 1995). Las élites, sin embargo, operan en un ámbito institucional donde los costos de la concentración de poder son más visibles, lo que modera su disposición a aceptar estas medidas, lo que se alinea con los hallazgos de Marenghi y García Montero (2025) respecto a la moderación de los legisladores oficialistas.

3. La caída de las preferencias democráticas en 2024

El modelo multinivel reveló un hallazgo sorprendente: la justificación de comportamientos autoritarios (primera dimensión) disminuyó a lo largo del tiempo. Este resultado es contra-intuitivo, especialmente en un contexto regional donde el "Modelo Bukele" ha ganado visibilidad y legitimidad como referente de control territorial (Gamboa y Schwartz, 2026; Martí i Puig y Rodríguez Suárez, 2024). Cabría esperar que el auge del populismo punitivo y la emulación de líderes de mano dura hubieran incrementado la justificación del autoritarismo, tal como sugieren las teorías de mimetismo institucional (Brown Araúz y Casullo, 2023). Sin embargo, nuestros datos apuntan en dirección opuesta.

Una interpretación sustantiva alternativa es que las élites parlamentarias, al observar la radicalización del modelo salvadoreño, podrían estar distanciados del autoritarismo, aunque mantengan un apoyo significativo a políticas de mano dura.

4. La "fotografía" de la mano dura: Guatemala vs Panamá

En contraposición a lo antes mencionado, el análisis descriptivo complementario de la tercera dimensión (mano dura) para Guatemala y Panamá en 2024 revela patrones diferenciados que se alinean con la literatura sobre populismo punitivo y violencia cultural (Galtung, 1990, 2016). Los resultados muestran que los ítems vinculados a la mano dura, registran un mayor respaldo en Guatemala que en Panamá.

Este hallazgo puede interpretarse a la luz del concepto de "eficacia instrumental" (Martí i Puig y Rodríguez Suárez, 2024), ya que, Guatemala enfrenta un contexto de mayor

violencia y fragilidad institucional, lo que podría hacer que sus élites perciban las medidas represivas como más necesarias o efectivas.

5. Convergencia autoritaria y erosión democrática

El marco teórico de partida sugería una creciente convergencia autoritaria entre opinión pública y élites (V-Dem Institute, 2026; Gamboa y Schwartz, 2026). Sin embargo, los resultados no respaldan esta hipótesis en términos de correlación directa. La ausencia de relación en la primera dimensión sugiere que la convergencia autoritaria no es un proceso lineal, sino que se manifiesta de forma diferenciada según las dimensiones y los contextos nacionales.

Donde sí se observa una dinámica de convergencia es en la dirección de las tendencias temporales. Tanto la sociedad como las élites muestran una caída en la justificación del autoritarismo en la primera dimensión a lo largo del tiempo, lo que puede interpretarse como una respuesta conjunta a cambios contextuales similares.

En el contexto del retroceso democrático global documentado por V-Dem (2026), este hallazgo invita a reflexionar sobre los mecanismos precisos a través de los cuales la erosión institucional se legitima socialmente. La discrepancia entre sociedad y élite en la segunda dimensión estudiada sugiere que el apoyo al autoritarismo no es monolítico, sino que se articula a través de diferentes dimensiones que pueden tener dinámicas de legitimación distintas. Mientras el populismo punitivo encuentra un eco inmediato en la demanda social de seguridad, las élites parecen operar con una lógica más matizada, distinguiendo entre mano dura y quiebre institucional.

-Anexos

- Resumen de recodificación de preguntas

Base	Pregunta	Código	Opciones originales	Recodificación
Latinobarómetro	Preferencia democracia vs autoritarismo	P10STGBS	1.Democracia preferable 2.Autoritarismo preferable en algunas circunstancias 3.Da lo mismo	1 - > 0 2 - > 0,5 3 - > 1
Latinobarómetro	Apoyo a gobierno militar	P20STM	1.Apoyaría 2.No apoyaría	1 - > 1 2 - > 0
Latinobarómetro	Aceptación de gobierno no democrático	P18STM.B	1.Muy de acuerdo 2.De acuerdo 3.En desacuerdo 4.Muy en desacuerdo	1 - > 1 2 - > 0,67 3 - > 0,33 4 - > 0
Latinobarómetro	Satisfacción con democracia	P11STGBS.A	1.Muy satisfecho 2.Más bien satisfecho 3.No muy satisfecho 4.Nada satisfecho	1 - > 1 2 - > 0,67 3 - > 0,33 4 - > 0

PELA-USAL	Preferencia democracia vs autoritarismo	DEM3	Escala 1-10 (1 = total desacuerdo; 10 = total acuerdo)	Invertir: (11- respuesta)/10
PELA-USAL	Satisfacción con democracia	DEM5	1.Muy satisfecho 2.Satisfecho 3.Insatisfecho 4.Muy insatisfecho	1 - > 1 2 - > 0,67 3 - > 0,33 4 - > 0
PELA-USAL	Populismo punitivo	ACT1 (Ítems 1-8)	Escala 1-10 (1 = muy en desacuerdo; 10 = muy de acuerdo)	(respuesta - 1) / 9

Elaboración propia en base a PELA-USAL y Latinobarómetro

Referencias Bibliográficas

Alcántara, M. (2020) 'Aspectos políticos de la "nueva normalidad" en América Latina', *Temas y Debates*, (Especial), pp. 17-29.

Alcántara, M. (dir.) (1994-2021) *Proyecto Élite Latinoamericanas (PELA-USAL)*. Salamanca: Universidad de Salamanca.

Alcántara Sáez, M. (2019) 'Los partidos y la fatiga de la democracia, especial referencia al caso de América Latina', *Derecho Electoral*, (28), pp. 1-24.

Antón-Mellón, J., Álvarez, G. y Rothstein, P. A. (2017) 'Populismo punitivo en España (1995-2015): presión mediática y reformas legislativas', *Revista Española de Ciencia Política*, (43), pp. 13-36. doi: 10.21308/recp.43.01.

Balzacq, T., Léonard, S. y Ruzicka, J. (2016) 'Securitization revisited: theory and cases', *International Relations*, 30(4), pp. 494-531. doi: 10.1177/0047117815596590.

Bonner, M. (2021) 'O que é o populismo punitivista? Uma tipologia baseada na comunicação midiática', *MATRIZES*, 15(1), pp. 77-102. doi: 10.11606/issn.1982-8160.v15i1p77-102.

Bottoms, A. (1995) 'The philosophy and politics of punishment and sentencing', en Clarkson, C. y Morgan, R. (eds.) *The Politics of Sentencing Reform*. Oxford: Clarendon Press.

Brown Araúz, H. y Casullo, M. E. (2023) 'Democratización y neopatrimonialismo: ¿hay una ola populista en Centroamérica?', *Revista Mexicana de Sociología*, 85(Especial), pp. 95-122.

Corporación Latinobarómetro (2020) *Estudio Latinobarómetro 2020: Oleada 2020 - Versión agregada*. Madrid: JD Systems Institute. Disponible en: <https://www.latinobarometro.org/latinobarometro-2020>.

Corporación Latinobarómetro (2023) *Estudio Latinobarómetro 2023: Oleada 2023 - Versión agregada*. Madrid: JD Systems Institute. Disponible en: <https://www.latinobarometro.org/latinobarometro-2023>.

Corporación Latinobarómetro (2024) *Estudio Latinobarómetro 2024: Oleada 2024 - Versión agregada*. Madrid: JD Systems Institute. Disponible en: <https://www.latinobarometro.org/latinobarometro-2024>.

Cox, G. W. y Morgenstern, S. (2001) 'Legislaturas reactivas y presidentes proactivos en América Latina', *Desarrollo Económico: Revista de Ciencias Sociales*, 41(163), pp. 373-393.

Galtung, J. (1990) 'Cultural violence', *Journal of Peace Research*, 27(3), pp. 291-305. doi: 10.1177/0022343390027003005.

Galtung, J. (2016) 'La violencia: cultural, estructural y directa', *Dialnet*, (5), pp. 147-168.

Gamboa, L. y Schwartz, R. A. (2026) *New Forms of Democratic Erosion in Latin America*. Cambridge: Cambridge University Press. doi: 10.1017/9781009862486.

Instituto Universitario de Opinión Pública (2026) *Encuesta de evaluación del séptimo año de gobierno de Nayib Bukele: Resultados generales*. San Salvador: Universidad Centroamericana José Simeón Cañas.

Lara Escalante, M. (2026) 'Democracy Under Strain: Declining Public Support, Institutional Weakening, and Press Freedom in Costa Rica', *Latin American Politics and Society*, pp. 1-19. doi: 10.1017/lap.2026.10060.

Linz, J. (1990) 'Democracia presidencial o parlamentaria. ¿Hay alguna diferencia?', pp. 18-43.

Marenghi, P. y García Montero, M. (2025) "'No es la democracia que míster superman quiere imponernos desde Washington": An analysis of populist attitudes on democracy from Latin American legislators', *Legislative Studies Quarterly*, 50(2), pp. 229-249. doi: 10.1111/lsq.12484.

Martí i Puig, S. y Rodríguez Suárez, D. (2024) 'Nayib Bukele, seguridad a cambio de democracia', *Más Poder Local*, (56), pp. 141-154. doi: 10.56151/maspoderlocal.231.

Nord, M., Altman, D., Fernandes, T., Good God, A. y Lindberg, S. I. (2026) *Democracy Report 2026: Unraveling The Democratic Era?*. Gotemburgo: V-Dem Institute, University of Gothenburg.

Torres-Rivas, E. (1991) 'La Transición Autoritaria hacia la Democracia en Centroamérica', *Revista de Estudios Políticos*, (74), pp. 431-448.

Torres-Rivas, E. (2007) *La piel de Centroamérica: Una visión sociológica de la violencia política en el siglo XX*. San José: FLACSO.

Tsebelis, G. (1995) 'La toma de decisiones en los sistemas políticos. Actores de veto en el presidencialismo, parlamentarismo, multicameralismo y multipartidismo', *British Journal of Political Science*, 25, pp. 289-338.